

NÚMERO: 203 / 2020

 Unidad Administrativa
 Área de Gestión de la
 Contratación

 Exp.: ECON/000097 /2020
 ECON/000098 /2020

Resolución de la *Consejera Delegada de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid*, por la que se procede a declarar la emergencia en la tramitación de los expedientes denominados **“SERVICIOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES EN LOS ENTORNOS TECNOLÓGICOS Y ÁMBITOS FUNCIONALES: MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, TRANSPORTES, VIVIENDA, INFRAESTRUCTURAS Y APLICACIONES DE GESTIÓN INTERNA DE MADRID DIGITAL”** y **“SERVICIOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES EN LOS ENTORNOS TECNOLÓGICOS Y ÁMBITOS FUNCIONALES: PRESIDENCIA, CULTURA, TURISMO, INTERIOR, GOBIERNO ABIERTO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIGITAL”**

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas según lo dispuesto en el *Artículo 10.8.2 b) de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas*, y de conformidad con lo que establece el *Artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)*, y demás disposiciones de aplicación, y vistos los informes de la Subdirección General de Servicios y Gestión de Aplicaciones,

RESUELVO

1. Declarar la Emergencia en la tramitación de los expedientes de contratación, conforme al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para la contratación de los **“SERVICIOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES EN LOS ENTORNOS TECNOLÓGICOS Y ÁMBITOS FUNCIONALES: MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, TRANSPORTES, VIVIENDA, INFRAESTRUCTURAS Y APLICACIONES DE GESTIÓN INTERNA DE MADRID DIGITAL”** y **“SERVICIOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES EN LOS ENTORNOS TECNOLÓGICOS Y ÁMBITOS FUNCIONALES: PRESIDENCIA, CULTURA, TURISMO, INTERIOR, GOBIERNO ABIERTO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIGITAL”**, por los motivos que se indican a continuación:

Con fecha 31 de enero de 2020, la OMS declaró el brote de SARS-CoV-2 como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. Los primeros casos en la Comunidad de Madrid se confirmaron el 26 de febrero. Desde esa fecha hasta la actualidad el ascenso en el número de casos confirmados ha sido exponencial, y según los modelos dinámicos para predecir la onda epidémica del COVID-19, si no se toman medidas de distanciamiento, el número de casos confirmados podría ascender a una cifra difícilmente asumible.

De acuerdo con lo previsto en el artículo primero de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, las distintas Administraciones públicas, dentro del ámbito de sus competencias, al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, pueden adoptar las medidas previstas en la citada Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.

Ante la situación de emergencia de salud pública y pandemia internacional, el Gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE núm. 67).

El artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, establece que la adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. De acuerdo con esta previsión, a todos los contratos que hayan de celebrarse para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 0926031920238856850028

El estado de alarma declarado se ha prorrogado dos veces fijándose, por el momento, como límite temporal de su vigencia el 26 de abril. El Real Decreto citado ha activado una serie de medidas que afectan a la continuidad de muy diferentes sectores de la actividad productiva del país, así como al régimen de vida ordinario de los ciudadanos tanto en el ámbito personal y familiar como en el profesional. Todas estas medidas tratan de hacer frente a la situación de crisis sanitaria que ha ocasionado la pandemia generada por el COVID-19 hasta el 26 de abril del presente año.

Entre las medidas que se han puesto en marcha, se encuentra la prevista en el Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo que, en orden a evitar la expansión de la infección por el COVID-19, prevé la consideración de determinadas actividades como esenciales.

En el Anexo que acompaña a este Real Decreto-Ley, se recogen aquellas actividades que, habiéndose considerado críticas por las distintas Administraciones Públicas desde que se declaró el estado de alarma, se califican como esenciales. En concreto en su apartado 13, considera como esenciales:

“13. Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.”

Siendo la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid la entidad pública competente para la prestación de los servicios informáticos y de comunicaciones en este ámbito autonómico, los servicios que presta son identificados como esenciales, lo que obliga a que dicha Entidad garantice su mantenimiento y continuidad durante este período de emergencia sanitaria.

Esta declaración adquiere, si cabe, mayor relevancia en aquellos servicios de mantenimiento y evolución de aplicaciones informáticas cuya criticidad ya había sido advertida por la Comunidad de Madrid, en cuanto que estos servicios soportan el mantenimiento y evolución así como el correctivo de los sistemas de información identificados como críticos por las diferentes Consejerías en el contexto del COVID-19 (i.e.: Consejo de Gobierno, Protección Civil, Portal institucional, registro electrónico y plataforma de gestión administrativa, administración local, etc.).

Por tanto, no habiéndose estimado oportuno prorrogar la prestación con el actual adjudicatario de los contratos correspondientes a los lotes 3 y 5 del expediente **“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (6 LOTES)”**, Exp. Núm.: ECON/000036/2016, y ante la imposibilidad de prestar el servicio con recursos internos, por las razones expuestas en los informes emitidos por la Subdirección General de Servicios y Gestión de Aplicaciones de esta Agencia, la no continuidad del servicio, cuya criticidad ha sido puesta de manifiesto, podría generar situaciones de grave peligro en el mantenimiento de sistemas que, en estos momentos, se configuran como críticos para dar soporte a servicios que se están prestando en la Comunidad de Madrid para atender la crisis sanitaria generada por el COVID-19.

Todo ello, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 120 de la LCSP, que regula un régimen excepcional de actuación para el caso de que la Administración tenga que actuar de manera inmediata ante situaciones críticas, justifica la contratación, mediante tramitación de emergencia, de los servicios de gestión del conocimiento y mantenimiento de aplicaciones en ámbitos funcionales identificados como críticos, que necesariamente deben estar en funcionamiento desde el próximo 13 de abril y durante un periodo máximo de 6 meses, que es el plazo necesario para licitar un nuevo expediente por el procedimiento de urgencia.

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la imposibilidad de llevar a cabo la contratación del servicio mediante tramitación ordinaria o urgente, es necesario dar respuesta de manera eficaz y con las garantías requeridas, evitando así causar perjuicios en la prestación del servicio público, garantizando que la prestación que se contrata mediante tramitación de emergencia sea la exclusivamente imprescindible para dar continuidad al servicio, en tanto no se adjudica por los procedimientos ordinarios que prevé la Ley de Contratos del Sector Público.

La tramitación de emergencia que se acuerda se fundamenta, por consiguiente, en la imperiosa y urgente necesidad de contar con los servicios referidos para cubrir las necesidades críticas manifestadas, justificación suficiente para la aplicación de la tramitación de emergencia, tanto desde el punto de vista formal como material.



2. Ordenar la ejecución de las actuaciones necesarias para adoptar las medidas pertinentes con la finalidad de contar con los servicios de gestión del conocimiento y mantenimiento de las aplicaciones en los ámbitos funcionales indicados anteriormente.
3. Proceder a la contratación de los servicios referidos de acuerdo con la siguiente imputación presupuestaria:

	LOTE 1 EVERIS	LOTE 2 INDRA	TOTAL
BASE IMPONIBLE	270.673,92 €	251.040,00 €	521.713,92 €
21 % IVA	56.841,52 €	52.718,40 €	109.559,92 €
IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO	327.515,44 €	303.758,40 €	631.273,84 €

Madrid, a fecha de firma
LA CONSEJERA-DELEGADA

